



Asamblea General

Distr. general
25 de octubre de 2012
Español
Original: inglés

Sexagésimo séptimo período de sesiones

Temas 130 y 141 del programa

Presupuesto por programas para el bienio 2012-2013

Administración de justicia en las Naciones Unidas

Administración de justicia en las Naciones Unidas y actividades de la Oficina del Ombudsman y de Servicios de Mediación de las Naciones Unidas

Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto

I. Introducción

1. La Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto ha examinado los informes del Secretario General sobre la administración de justicia en las Naciones Unidas (A/67/265), sobre las actividades de la Oficina del Ombudsman y de Servicios de Mediación de las Naciones Unidas (A/67/172) y sobre las enmiendas propuestas de los reglamentos del Tribunal Contencioso-Administrativo de las Naciones Unidas y del Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas (A/67/349). La Comisión Consultiva también tuvo ante sí el informe del Consejo de Justicia Interna sobre la aplicación del sistema de administración de justicia (A/67/98). Durante su examen de los informes, la Comisión se reunió con representantes del Secretario General, quienes proporcionaron información y aclaraciones adicionales.

2. La Comisión Consultiva observa que la Sexta Comisión ha examinado los aspectos jurídicos de los informes, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 48 de la resolución 66/237 de la Asamblea General. El Presidente de la Sexta Comisión transmitió las opiniones de la Comisión al Presidente de la Asamblea General en una carta de fecha 19 de octubre de 2012 y pidió que se señalara a la atención del Presidente de la Quinta Comisión y se distribuyera como documento de la Asamblea General.

3. El presente informe contiene las observaciones y recomendaciones de la Comisión Consultiva con respecto a los informes antes mencionados. En la sección II, la Comisión expresa opiniones generales sobre la administración de justicia en



las Naciones Unidas y, en particular, formula observaciones con respecto al sistema formal de justicia y las solicitudes de recursos conexas. También analiza las respuestas del Secretario General a diversas solicitudes formuladas en la resolución 66/237 de la Asamblea General. La sección III contiene las observaciones y recomendaciones de la Comisión con respecto a las actividades de la Oficina del Ombudsman y de Servicios de Mediación de las Naciones Unidas en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011.

II. Administración de justicia en las Naciones Unidas

4. Conforme a lo solicitado, en el informe del Secretario General sobre la administración de justicia en las Naciones Unidas se describen las actividades del sistema durante el año civil terminado el 31 de diciembre de 2011 y se responde a las solicitudes específicas formuladas en la resolución 66/237 por la Asamblea General para que esta lo examine en el sexagésimo séptimo período de sesiones. Con respecto a las estadísticas relativas al volumen de causas, la Comisión observa que ponen de manifiesto que ha ido aumentando continuamente en la mayoría de los elementos del sistema de administración de justicia en 2011. Por ejemplo, la Dependencia de Evaluación Interna recibió 952 solicitudes de revisión en 2011, un 123% más que en 2010 (A/67/265, párr. 17). En ese mismo período, el Tribunal Contencioso-Administrativo de las Naciones Unidas recibió 282 nuevas causas, un 74% más que en 2010 (*ibid.*, párr. 23). Las estadísticas relativas a 2012 disponibles hasta la fecha, que se facilitaron a la Comisión a petición suya, parecen mostrar cierta estabilización del volumen de causas en la Dependencia y en el Tribunal Contencioso-Administrativo en el año en curso. La Oficina de Asistencia Letrada al Personal recibió 702 causas nuevas, un 23% más que en 2010 (*ibid.*, párrs. 65 y 68 y cuadro 1). En cambio, el número de nuevas apelaciones ante el Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas en 2011 parece haberse mantenido más constante (véase párr. 26 del presente informe). Con respecto al sistema informal, la Comisión observa que el número de casos considerados por la Oficina del Ombudsman y de Servicios de Mediación de las Naciones Unidas aumentó un 28% en 2011 con respecto al año anterior (A/67/172, párr. 16).

5. Como se puede observar en el cuadro 1, en 2011 el volumen de causas de las oficinas y entidades del sistema fue en aumento, con la excepción del Tribunal de Apelaciones.

Cuadro 1
Causas resueltas y causas recibidas en 2011

<i>Entidad</i>	<i>Causas y solicitudes resueltas</i>	<i>Causas recibidas</i>	<i>Referencia en el documento A/67/265</i>
Dependencia de Evaluación Interna	578	952	Párrafo 12
Oficina de Asistencia Letrada al Personal	526	702	Párrafo 65
Tribunal Contencioso-Administrativo	272	282	Párrafo 23
Tribunal de Apelaciones	102	96	Párrafo 47

6. En su sexagésimo sexto período de sesiones, sobre la base de las peticiones del Secretario General y las recomendaciones de la Comisión Consultiva, la Asamblea General, en su resolución 66/237, decidió reforzar determinados ámbitos a fin de atender las diferentes necesidades de recursos del sistema. En respuesta a sus preguntas, se informó a la Comisión de que los recursos dedicados al sistema de administración de justicia para el bienio 2012-2013 ascendían en esos momentos a unos 38,7 millones de dólares, incluidos los recursos asignados al sistema informal y a la Dependencia de Evaluación Interna (véase también párr. 54 del presente informe). En el cuadro 2 se presenta un desglose de los recursos.

Cuadro 2

Suma consignada para la administración de justicia en el bienio 2012-2013

(En millones de dólares de los Estados Unidos)

<i>Entidad/oficina</i>	<i>Presupuesto ordinario, 2012-2013</i>	<i>Cuenta de apoyo para las operaciones de mantenimiento de la paz, 2012/13</i>	<i>Ajuste de costos bienal</i>	<i>Total</i>
Oficina de Administración de Justicia	13 817,6	—		13 817,6
Oficina del Ombudsman y de Servicios de Mediación de las Naciones Unidas	6 672,8	1 706,0	1 706,0	10 084,8
Oficina de Asistencia Letrada al Personal	2 508,1	76,0	76,0	2 660,1
Dependencia de Evaluación Interna	2 005,1	—		2 005,1
Oficina de Gestión de Recursos Humanos ^a	2 774,8	1 446,0	1 446,0	5 666,8
Oficina de Asuntos Jurídicos ^a	2 406,8	294,0	294,0	2 994,8
Comisión Económica y Social para Asia Occidental ^a	—	—		—
Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico ^a	325,9	—		325,9
Comisión Económica para África ^a	—	—		—
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra ^a	672,9	—		672,9
Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi ^a	425,1	—		425,1
Total	31 609,1	3 522,0	3 522,0	38 653,1

^a La estimación de los gastos se basa en el número y la categoría de los funcionarios asignados a la administración de justicia en las respectivas oficinas.

Observaciones y recomendaciones generales

7. La Comisión Consultiva recuerda que la Asamblea General, en su sexagésimo sexto período de sesiones, reafirmó su decisión anterior, contenida en el párrafo 4 de su resolución 61/261, de establecer un nuevo sistema de administración de justicia independiente, transparente, profesional, con recursos suficientes y descentralizado conforme con las normas pertinentes del derecho internacional y con los principios

de legalidad y del debido proceso para asegurar que se respeten los derechos y obligaciones de los funcionarios y que los administradores y los funcionarios respondan por igual de sus actos (véase resolución 66/237, párr. 8). La Asamblea también reconoció que el nuevo sistema de administración de justicia seguía evolucionando y que era necesario vigilar cuidadosamente su aplicación para asegurar que se mantuviera dentro de los parámetros establecidos por la Asamblea General (*ibid.*, párr. 5). Además, destacó la importancia de desarrollar una cultura de diálogo y de arreglo amistoso de las controversias utilizando el sistema informal (*ibid.*, párr. 17).

8. En el resumen inicial de su informe (A/67/265), el Secretario General afirmó que desde la creación del sistema de administración de justicia, que empezó a funcionar el 1 de julio de 2009, la Asamblea General ha reconocido los logros del sistema y que este se encuentra en un estado de evolución, y ha seguido vigilándolo para asegurar que siga cumpliendo su mandato. En respuesta a sus preguntas, se informó a la Comisión Consultiva de que el plazo medio que se necesita para resolver una causa en el sistema vigente desde que la recibe el Tribunal Contencioso-Administrativo es de unos 12 a 14 meses. También se informó a la Comisión de que las causas tramitadas en el anterior sistema de justicia hasta la última instancia tardaban un promedio de cinco años en resolverse.

9. Con respecto a la eficacia general del sistema, la Administración también hizo saber a la Comisión Consultiva su opinión sobre los aspectos del sistema que era preciso reforzar. Se explicó que tenía que haber recursos judiciales suficientes para sacar adelante el actual volumen de causas y evitar que volvieran a acumularse las causas sin resolver, y que convendría que hubiera incentivos que contribuyeran a que el personal se lo pensara bien antes de apelar los fallos en su contra del Tribunal Contencioso-Administrativo. También se mencionaron la falta de mecanismos para tomar medidas con respecto a las denuncias de faltas de conducta del personal judicial y la inexistencia de un código de conducta para la representación jurídica, dos carencias que fueron señaladas por el Consejo de Justicia Interna. El Secretario General presentó propuestas al respecto en su informe (*ibid.*, anexos VII y VIII), sobre las cuales la Comisión formula observaciones en los párrafos 52 y 53 del presente informe. La Comisión observa, sin embargo, que aún no se ha realizado una evaluación independiente del sistema de administración de justicia en todos sus aspectos que incluya un examen del volumen de causas y de las tendencias de jurisprudencia, los incentivos para que las controversias se resuelvan cuanto antes y por medio del sistema informal, y las posibilidades de aumentar la eficiencia, entre otras cosas mediante un mejor uso de la tecnología y los recursos de personal, y en la que se determine si efectivamente se están logrando los objetivos y propósitos del sistema, establecidos en la resolución 61/261.

10. Además, en su informe final, la primera formación del Consejo de Justicia Interna —el mandato de cuyos miembros terminó el 30 de junio de 2012— llegó a la conclusión de que el sistema había progresado bastante bien desde su creación. No obstante, el Consejo seguía estando convencido de que la escasez de recursos podía acarrear graves perjuicios para el sistema y ocasionar los retrasos de que adolecía el antiguo sistema de justicia (véase A/67/98, párr. 60).

11. La Comisión Consultiva observa que, después de tres años enteros de funcionamiento, el sistema de administración de justicia ya no se encuentra en la fase de puesta en marcha. Si bien la Comisión reconoce que el sistema sigue

evolucionando, observa con preocupación las repercusiones de que cada vez más casos acaben resolviéndose por medios formales. En opinión de la Comisión, es preciso que se adopten medidas más enérgicas para fomentar la solución informal de las controversias. Además, la Comisión destaca que para reducir los litigios es también indispensable que se determinen y subsanen las causas profundas que hacen que se recurra tanto al sistema de justicia interna. Habida cuenta de que parte de las causas interpuestas ante los Tribunales están relacionadas con deficiencias fundamentales en la manera de abordar y gestionar asuntos relacionados con los recursos humanos, es esencial que se establezcan buenas prácticas de gestión en toda la Organización.

12. En consecuencia, la Comisión Consultiva recuerda su recomendación anterior de que se realice una evaluación exhaustiva de la evolución y el funcionamiento del sistema de administración de justicia (véase A/66/7/Add.6, párr. 6). Si bien la Comisión reconoce que hay aspectos del sistema que todavía tienen que consolidarse, está convencida de que ha de hacerse una evaluación independiente provisional de todos los aspectos del sistema que están funcionando para determinar el rumbo general en que está avanzando el sistema y cerciorarse de que se cumplen los principios rectores establecidos en el párrafo 4 de la resolución 61/261. El resultado de esta evaluación provisional podría además servir de base para la adopción de futuras decisiones con respecto a la armonización de los recursos entre las oficinas y entidades pertinentes que se ocupan de los distintos aspectos del sistema de administración de justicia.

13. La Comisión Consultiva observa que el informe más reciente del Secretario General sobre la administración de justicia contiene estadísticas relativas a todo el año civil para facilitar el análisis de las tendencias y del volumen de trabajo a lo largo del tiempo, como recomendó en su día la Comisión. En respuesta a sus preguntas, también se facilitó a la Comisión una útil descripción de las funciones de las distintas entidades que integran el sistema actual y las diferencias entre ellas, así como del personal asignado a cada una de ellas. Esa información figura en los anexos I y II del presente informe. En el anexo III figura el organigrama del sistema de administración de justicia de las Naciones Unidas. **La Comisión reitera su opinión de que la presentación de dicha información mejoraría con un mayor uso de cuadros y/o gráficos y solicita que los informes futuros incluyan datos estadísticos de manera más estructurada, descriptiva y coherente** (véase A/66/7/Add.6, párr. 8).

A. Examen del sistema formal de justicia y de las solicitudes de recursos conexos

1. Dependencia de Evaluación Interna

14. Las actividades de la Dependencia de Evaluación Interna, que forma parte de la Oficina del Secretario General Adjunto de Gestión, se describen en los párrafos 6 a 17 del informe del Secretario General (A/67/265). La Dependencia es responsable de realizar una evaluación interna de las decisiones impugnadas. Este primer paso obligatorio ofrece a la Administración la oportunidad de confirmar, corregir o invalidar decisiones, según se estime necesario, y también proporciona una vía para encontrar soluciones alternativas para dirimir las controversias.

15. En lo que respecta al volumen de trabajo y a la producción de la Dependencia, el Secretario General indica que esta recibió 952 solicitudes de evaluación administrativa en 2011, lo que refleja un incremento del 123% respecto del año anterior. Se suministró a la Comisión Consultiva, a su solicitud, información actualizada relativa al período comprendido entre el 1 de enero y el 3 de octubre de 2012, en que se recibieron otras 727 solicitudes. Se prevé que en 2012 se recibirán alrededor de 1.000 solicitudes.

16. Al mismo tiempo, el Secretario General indica que el 33% de las solicitudes recibidas y concluidas por la Dependencia de Evaluación Interna en 2011 se resolvieron por medios informales (véase A/67/265, párr. 7). Otro 52% de las decisiones que fueron confirmadas por recomendación de la Dependencia no fueron impugnadas por los funcionarios ante el Tribunal Contencioso-Administrativo (*ibid.*, párr. 10). Además, en el 87% de las causas en que entendió el Tribunal después de la evaluación administrativa, la resolución adoptada por este fue la misma que la recomendada por la Dependencia (*ibid.*, párr. 11).

17. La Comisión Consultiva recuerda sus consideraciones y observaciones respecto de la eficacia de la Dependencia de Evaluación Interna (véase A/66/7/Add.6, párr. 14) y reitera la importancia de los esfuerzos para facilitar la solución de los casos antes de que lleguen a presentarse al Tribunal Contencioso-Administrativo.

18. El Secretario General observa que, de todas las causas tramitadas actualmente por la Dependencia de Evaluación Interna, aproximadamente el 30% han sido iniciadas por funcionarios en misiones de mantenimiento de la paz y, sin embargo, ninguno de los puestos de la Dependencia se financia con cargo a la cuenta de apoyo para las operaciones de mantenimiento de la paz (véase el organigrama que figura en el anexo III del presente informe). Dado el incremento sostenido del número de solicitudes de evaluación administrativa y el plazo reglamentario de 45 días para su tramitación, el Secretario General señala que existe el riesgo de retrasos, particularmente en las solicitudes provenientes de personal sobre el terreno, habida cuenta del volumen de trabajo que entraña la tramitación de causas de esa naturaleza (véase A/67/265, párr. 16). **Por lo tanto, la Comisión Consultiva no tiene objeciones a la solicitud del Secretario General de que se apruebe un puesto adicional de Oficial Jurídico de categoría P-3 para la Dependencia de Evaluación Interna, financiado con cargo a la cuenta de apoyo para el período de seis meses que termina el 30 de junio de 2013, en el entendido que se financiará con cargo a la partida de personal temporario general, mientras se espera el resultado de la evaluación independiente mencionada.**

2. Tribunal Contencioso-Administrativo de las Naciones Unidas y sus secretarías

19. La información sobre la composición y el funcionamiento del Tribunal Contencioso-Administrativo figura en los párrafos 18 a 42 del informe del Secretario General (A/67/265). Con respecto a su volumen de trabajo y su producción, el Secretario General indica que el Tribunal recibió 282 nuevas causas en 2011, lo que refleja un incremento del 74% respecto del año civil anterior. Se suministró a la Comisión Consultiva, a su solicitud, información actualizada relativa al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de agosto 2012, en que se

recibieron otras 193 causas. Se prevé que el volumen de causas total de 2012 sea similar al de 2011.

20. La Comisión Consultiva observa que la capacidad adicional aportada por los tres magistrados titulares *ad litem*, cuyo mandato se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2012, y la labor de los dos magistrados en régimen de media dedicación han permitido al Tribunal Contencioso-Administrativo realizar progresos significativos en la reducción del atraso en la tramitación de las causas heredadas del antiguo sistema. En respuesta a sus preguntas, se informó a la Comisión de que el retraso proveniente del sistema antiguo prácticamente había desaparecido y de que en esos momentos solo quedaban pendientes 13 de esas causas.

21. El Secretario General destaca que el Tribunal Contencioso-Administrativo sigue teniendo un gran volumen de causas y señala que durante el período de que se informa, el Tribunal ha tenido que hacer frente a un aumento del número de solicitudes de suspensión de la ejecución, que, según el reglamento, deben examinarse en un plazo de cinco días. El Secretario General pone de relieve que el tiempo necesario para concluir cada una de las causas y dictar fallos va en aumento, principalmente como consecuencia del mayor número de causas incoadas. Por consiguiente, en el informe del Secretario General se advierte del riesgo de que se produzca un nuevo atraso, lo que causará demoras en la resolución de las causas (*ibid.*, párr. 32). Por estas razones, recomienda que la Asamblea General prorrogue por un año, hasta el 31 de diciembre de 2013, el mandato de los tres magistrados *ad litem* en funciones del Tribunal y solicita que se apruebe la continuación, en concepto de personal temporario general, de tres puestos de Oficial Jurídico (P-3), dos del Cuadro de Servicios Generales (otras categorías) y uno del Cuadro de Servicios Generales (contratación local) para prestar apoyo a los magistrados *ad litem* durante el mismo período. La solicitud de recursos adicionales fue firmemente apoyada por el Consejo de Justicia Interna en su informe (véase A/67/98, párrs. 18 a 29).

22. La Comisión Consultiva señala que tanto el Secretario General como el Consejo de Justicia Interna siguen prefiriendo que haya dos magistrados en régimen de dedicación exclusiva en cada uno de los tres lugares de destino en que el Tribunal Contencioso-Administrativo tiene una secretaría (véanse A/67/265, párr. 32, y A/67/98, párr. 22). Como alternativa menos costosa, el Consejo también continúa apoyando la propuesta de aumentar las provisiones presupuestarias para sufragar los dos puestos existentes de magistrado en régimen de dedicación parcial, para así poder ampliar el alcance de su labor y su contribución (A/67/98, párr. 24). La Comisión había indicado previamente que debería examinarse con mayor detenimiento esa propuesta, que sería un arreglo alternativo eficiente y flexible. Sin embargo, el Secretario General no ha presentado esa propuesta, que, de aprobarse, requeriría una enmienda al estatuto del Tribunal.

23. En ausencia de una primera evaluación independiente y una previsión clara del volumen de causas a largo plazo del Tribunal Contencioso-Administrativo, la Comisión Consultiva no está en condiciones de recomendar la creación de nuevos puestos de magistrado en régimen de dedicación exclusiva ni la adaptación de los arreglos presupuestarios para los puestos existentes de magistrado en régimen de dedicación parcial. Recordando el párrafo 20 de su informe anterior (A/66/7/Add.6), la Comisión observa que factores como una jurisprudencia cada vez más firme pueden, con el tiempo, reducir la carga de trabajo del Tribunal; sin embargo, no parece probable que en un futuro

próximo vaya a disminuir significativamente. Por tanto, la Comisión apoya la solicitud del Secretario General de que el mandato de los tres magistrados *ad litem* se prorrogue hasta el 31 de diciembre de 2013. La Comisión recomienda también que se mantenga hasta esa misma fecha el personal de apoyo a los magistrados *ad litem*, en calidad de personal temporario general, a saber, tres puestos de Oficial Jurídico (P-3), dos del Cuadro de Servicios Generales (otras categorías) y uno del Cuadro de Servicios Generales (contratación local).

24. En el párrafo 5 de su informe sobre las posibles enmiendas de los reglamentos del Tribunal Contencioso-Administrativo de las Naciones Unidas y del Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas (A/67/349), el Secretario General propone que el número de sesiones plenarias que celebra normalmente el Tribunal Contencioso-Administrativo se incremente de una a dos sesiones por año. Esto no requerirá recursos adicionales hasta el bienio 2014-2015 (*ibid.*, párr. 11 b)).

25. La Comisión Consultiva observa que, desde la creación del sistema de justicia en julio de 2009, el Tribunal Contencioso-Administrativo ha celebrado, de hecho, un promedio de dos sesiones plenarias por año. La Administración indica que estas sesiones, que duran una semana completa, permiten a los magistrados reunirse en persona y debatir en profundidad sobre distintas cuestiones jurídicas, adoptar decisiones sobre directrices prácticas y celebrar consultas con los diferentes interesados sobre los asuntos que afectan al sistema de justicia. La Administración sostiene que los canales de comunicación habituales, como el correo electrónico, el teléfono o la videoconferencia no son suficientes para realizar de manera efectiva esa labor. También indica que la diferencia horaria y los considerables gastos relacionados con las videoconferencias limitan la medida en que se puede llevar a cabo esa labor durante las reuniones quincenales periódicas de los magistrados. **La Comisión no apoya la enmienda propuesta del reglamento de que se institucionalice la celebración de dos sesiones plenarias por año, sino que recomienda mantener la práctica de celebrarlas según sea necesario, e incluso ampliar su duración, según proceda en cada caso, teniendo en cuenta las exigencias que plantee el volumen de causas que se estén tratando. En este contexto, la Comisión señala que uno de los asuntos que actualmente afecta al funcionamiento del sistema es el retraso en la resolución de las causas. La Comisión hace hincapié en que debería darse prioridad a la búsqueda de formas de reducir al máximo o eliminar el retraso.**

3. Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas y sus secretarías

26. La información sobre la composición y el funcionamiento del Tribunal de Apelaciones figura en los párrafos 43 a 54 del informe del Secretario General (A/67/265). La Comisión Consultiva observa que en 2011 el Tribunal recibió 96 nuevas apelaciones, frente a las 110 causas que recibió durante su primer año de funcionamiento (véase A/66/7/Add.6, cuadro 3). Se informó a la Comisión Consultiva, a su solicitud, de que en el período finalizado el 30 de septiembre de 2012, el Tribunal había recibido 98 nuevas apelaciones y tenía 93 apelaciones pendientes de resolución.

27. El reglamento del Tribunal de Apelaciones dispone que celebrará normalmente dos períodos ordinarios de sesiones por año, según lo requiera el volumen de causas. En 2010 y 2011, el Tribunal celebró tres períodos de sesiones de dos semanas de duración, cada año. En cada período de sesiones, el Tribunal dictó unos 30 fallos. En

el informe del Secretario General se indica que también se prevé celebrar tres períodos de sesiones en 2012 a modo de evitar la acumulación de causas pendientes. En respuesta a su consulta, se informó a la Comisión de que los magistrados del Tribunal consideran que no es probable que el volumen de causas disminuya en un futuro próximo.

28. En su informe sobre las posibles enmiendas de los reglamentos de los dos Tribunales, el Secretario General propone que el número de períodos ordinarios de sesiones que celebra normalmente el Tribunal de Apelaciones para conocer de las causas aumente de dos a tres por año (véase A/67/349, párr. 7). La Comisión Consultiva observa también que las disposiciones actuales del reglamento prevén que el Tribunal celebre períodos de sesiones en Ginebra o Nairobi, según lo requieran las causas. En respuesta a su consulta, se informó a la Comisión de que la escasez de recursos había limitado hasta ese momento el número de períodos de sesiones celebrados fuera de la Sede, en vista de los costos de viaje del personal de la secretaría, que está en Nueva York. La Comisión observa además que la propuesta de modificar el reglamento no requerirá recursos adicionales hasta el bienio 2014-2015, dado que ya se previeron recursos para la celebración de un tercer período de sesiones en el bienio en curso (*ibid.*, párr. 11 b)).

29. Si bien la Comisión Consultiva reconoce que el volumen de causas del Tribunal de Apelaciones hasta la fecha parecería justificar la celebración de tres períodos de sesiones por año, no está de acuerdo con la propuesta de dar carácter oficial a esta frecuencia de los períodos de sesiones mediante la enmienda del reglamento hasta que las tendencias del volumen de causas se hayan estabilizado. La Comisión también recuerda su recomendación anterior de que se tomen medidas, según sea necesario, para satisfacer las necesidades adicionales no relacionadas con puestos mediante la modificación de las prioridades de los recursos y las actividades (véase A/66/7/Add.6, párr. 29). A este respecto, el Tribunal podría examinar alternativas como ampliar la duración de cada período de sesiones a fin de permitir una utilización más eficiente de los recursos.

4. Oficina de Asistencia Letrada al Personal

30. En los párrafos 55 a 75 del informe del Secretario General (A/67/265) figura información sobre el funcionamiento de la Oficina de Asistencia Letrada al Personal. El cuadro 1 de ese mismo informe muestra las estadísticas del volumen de causas, desglosadas por el tipo de asistencia prestada, y refleja que en 2011 las causas recibidas por la Oficina aumentaron un 23% con respecto al año anterior. En respuesta a sus preguntas, se proporcionaron a la Comisión Consultiva estadísticas actualizadas sobre las actividades de la Oficina. Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2012, la Oficina recibió 656 causas nuevas, un 25% más, aproximadamente, con respecto al período equivalente de 2011.

31. En el párrafo 28 de su resolución 66/237, la Asamblea General solicitó al Secretario General que presentara un informe exhaustivo en el que propusiera diferentes opciones para la representación de los funcionarios ante los Tribunales internos, así como una propuesta detallada de un mecanismo obligatorio financiado por el personal. La Comisión Consultiva, en su informe precedente sobre la administración de justicia, ofreció numerosos comentarios sobre las solicitudes de anteriores puestos y recursos adicionales de la Oficina y observó que las decisiones

relativas a las necesidades de personal debían tener en cuenta los resultados de las deliberaciones de la Asamblea General sobre el mandato y el alcance de las funciones de la Oficina. En consecuencia, dado que no se habían tomado decisiones sobre el mandato y el alcance de las funciones de la Oficina, ni sobre la propuesta de un mecanismo financiado por el personal para respaldar la prestación de asistencia jurídica y apoyo al personal, la Comisión no recomendó la aprobación de nuevos puestos para la Oficina (véase A/66/7/Add.6, párr. 39). Se ha preparado el informe solicitado sobre un mecanismo obligatorio financiado por el personal, que figura en el anexo II del informe del Secretario General (A/67/265). La Comisión formula observaciones respecto a las propuestas que figuran en ese informe en los párrafos 38 a 44.

32. Sin perjuicio del resultado de las deliberaciones de la Asamblea General sobre estas cuestiones, el Secretario General solicita que se mantenga una plaza de P-3 en Nairobi durante un período adicional de seis meses, hasta el 30 de junio de 2013, financiada con cargo a la cuenta de apoyo para las operaciones de mantenimiento de la paz, habida cuenta del gran número de causas que sigue recibiendo esa oficina. La Comisión Consultiva confirmó, tras ser consultada, que el promedio de causas por funcionario en la oficina de Nairobi duplicaba con creces el de Nueva York, y era más de tres veces mayor que el de la oficina de Ginebra. Esta información figura en el anexo IV de este informe. **Por tanto, la Comisión recomienda que se mantenga la plaza de Oficial Jurídico de categoría P-3 en la Oficina de Asistencia Letrada al Personal de Nairobi por un período adicional de seis meses, que se financiará con cargo al presupuesto de la cuenta de apoyo para las operaciones de mantenimiento de la paz, y solicita que se informe sobre los gastos en el contexto del informe de ejecución. El resultado del examen de la Asamblea General sobre el alcance y el mandato de la Oficina, incluida la propuesta sobre el mecanismo obligatorio financiado por el personal, y la evaluación independiente del sistema de administración de justicia que se recomienda en el párrafo 12 del presente informe se deberán tener en cuenta al adoptar cualquier decisión sobre la financiación de la plaza después del 30 de junio de 2013. Toda solicitud al respecto deberá presentarse en el contexto del próximo proyecto de presupuesto para la cuenta de apoyo para las operaciones de mantenimiento de la paz.**

B. Respuestas a las peticiones de la Asamblea General en la resolución 66/237

1. Institucionalización de buenas prácticas de gestión y recomendaciones para abordar las cuestiones sistémicas e intersectoriales

33. En el párrafo 11 de su resolución 66/237, la Asamblea General solicitó al Secretario General que hiciera todo lo posible por institucionalizar las buenas prácticas de gestión a fin de abordar los factores subyacentes que provocaban controversias en el lugar de trabajo.

34. En este contexto, la Comisión Consultiva desea subrayar las opiniones del Secretario General sobre las recomendaciones de la Oficina del Ombudsman y de Servicios de Mediación de las Naciones Unidas sobre las medidas para abordar las cuestiones sistémicas de recursos humanos, que figuran en el anexo I del informe del Secretario General (A/67/265). Esta información se ha proporcionado a raíz de

una solicitud formulada por la Comisión en su informe sobre el examen de las cuestiones sistémicas derivadas de la labor (véase A/66/7/Add.6, párr. 102). Las cuestiones señaladas en el anexo I del informe del Secretario General se refieren a una amplia gama de aspectos, como la movilidad, la gestión de la actuación profesional, la uniformidad de las condiciones de servicio, el hostigamiento, la realización de las investigaciones y la salud y la seguridad ocupacionales. La Comisión observa que el informe del Secretario General sobre las Actividades de la Oficina del Ombudsman y de Servicios de Mediación de las Naciones Unidas también subraya la gestión de la actuación profesional como la cuestión intersectorial más importante (véase A/67/172, párrs. 109 a 131). A este respecto, la Comisión se remite a sus observaciones con respecto al próximo informe del Secretario General sobre la gestión de los recursos humanos (A/67/545).

35. Además, en el informe del Secretario General sobre la administración de justicia se incluyen datos referentes a los tipos de causas tramitadas por el Tribunal Contencioso-Administrativo (véase A/67/265, párr. 30). El informe indica que el 40% de las causas se refería a cuestiones relacionadas con el nombramiento, el 25% a la separación del servicio, el 11% a cuestiones disciplinarias y el 8% a prestaciones y derechos. Las causas restantes estaban relacionadas con la clasificación y otros asuntos. Este desglose es comparable a las estadísticas presentadas en el informe anterior de la Comisión Consultiva (A/66/7/Add.6, párr. 17).

36. La Comisión Consultiva observa que la Dependencia de Evaluación Interna compila una guía de experiencias prácticas para el personal directivo y notas orientativas que se distribuyen a todos los jefes de oficina y departamento. En ellas se ofrece, entre otras cosas, un examen de la jurisprudencia de los Tribunales Contencioso-Administrativo y de Apelaciones y se analiza el modo en que las sentencias interpretan y aplican las normas internas de la Organización. El Secretario General destaca la necesidad de abordar los factores subyacentes que dan lugar a controversias en el lugar de trabajo; en particular, la falta de un diálogo oportuno y abierto sobre los problemas de actuación profesional y la falta de una comprensión cabal por parte del personal directivo sobre las normas y los procedimientos internos de la Organización. **La Comisión acoge con satisfacción la publicación y difusión de las directrices sobre la experiencia adquirida derivadas de los fallos de los Tribunales. La Comisión también alienta al Secretario General a que redoble sus esfuerzos por fortalecer las buenas prácticas de gestión a fin de abordar los factores subyacentes que provocan controversias en el lugar de trabajo.**

2. Rendición de cuentas en los casos en que las decisiones impugnadas han dado lugar a fallos que otorgan indemnizaciones al personal

37. En el párrafo 41 de su resolución 66/237, la Asamblea General solicitó al Secretario General que presentara información acerca de las medidas concretas que se hubieran adoptado para asegurar la rendición de cuentas en los casos en que las decisiones impugnadas hubieran dado lugar a fallos que impusieran indemnizaciones para el personal. La Comisión Consultiva observa que si bien el informe del Secretario General presenta varias opciones de medidas para hacer efectiva la rendición de cuentas del personal directivo (véase A/67/265, párr. 156), no hay datos concretos sobre las medidas adoptadas en los casos en que las decisiones impugnadas se han traducido en la adjudicación de indemnizaciones al personal. A este respecto, el informe del Secretario General indica que en 2011 se

pagó un total de 1.231.719 dólares en indemnizaciones basadas en fallos de los Tribunales (*ibid.*, anexo IX.B). La Comisión también observa que durante el mismo período el Tribunal de Apelaciones anuló o redujo indemnizaciones otorgadas por el Tribunal Contencioso-Administrativo por un total de más de 1,5 millones de dólares (véase A/67/265, párr. 149). **La Comisión lamenta que el Secretario General no haya proporcionado datos concretos sobre la imposición de medidas específicas para hacer efectiva la rendición de cuentas en los casos en que las decisiones impugnadas se hayan traducido en la adjudicación de indemnizaciones al personal y solicita al Secretario General que presente información más detallada a este respecto en su próximo informe sobre la administración de justicia. Recordando el párrafo 89 de su informe anterior (A/66/7/Add.6), la Comisión también desea subrayar su opinión de que las personas deben rendir cuentas de sus actos cuando la violación de las normas y los procedimientos de la Organización dé lugar a pérdidas financieras.**

3. Representación más coherente y uso más eficiente de los recursos

38. En el párrafo 23 de su resolución 66/237, la Asamblea General solicitó al Secretario General que estudiara todas las formas posibles de conseguir una representación más coherente y un uso más eficiente de los recursos, teniendo en cuenta la naturaleza específica de la representación que le corresponde ante los Tribunales. En su informe sobre el período anterior, la Comisión Consultiva expresó la opinión de que el Secretario General debía considerar la posibilidad de tener una oficina encargada de representarlo ante los dos Tribunales (véase A/66/7/Add.6, párr. 7). En su informe, el Secretario General indica que el centro de atención de los procedimientos del sistema de administración de justicia es diferente entre el Tribunal Contencioso-Administrativo y el Tribunal de Apelaciones. La defensa ante el Tribunal Contencioso-Administrativo hace hincapié en establecer los hechos, en cambio en el Tribunal de Apelaciones tienen más importancia las cuestiones de derecho. La división de tareas existente en la representación de la Organización se debe a esas exigencias diferentes, en opinión del Secretario General (véase A/67/265, párr. 172). Además, el Secretario General cree que la reorganización de la estructura actual o la concentración de las funciones de representación no redundaría en ventajas operativas ni en economías. **En consecuencia, la Comisión toma nota de la opinión del Secretario General y, de todas maneras, le solicita que siga examinando el asunto y proponiendo medidas alternativas para aumentar la eficiencia, a medida que las tendencias relativas al volumen de causas de los dos Tribunales se vayan definiendo más.**

4. Distintas opciones para la representación de los funcionarios ante los Tribunales internos y mecanismo obligatorio financiado por el personal en apoyo de la Oficina de Asistencia Letrada al Personal

39. En el párrafo 28 de su resolución 66/237, la Asamblea General solicitó al Secretario General que, tras consultar con el Consejo de Justicia Interna y otros órganos competentes, le presentara un informe exhaustivo en el que propusiera diferentes opciones para la representación de los funcionarios ante los Tribunales internos, así como una propuesta detallada de un mecanismo obligatorio financiado por el personal, para someterlo al examen de las Comisiones Quinta y Sexta, en sus respectivos ámbitos de competencia, durante el sexagésimo séptimo período de sesiones. La respuesta a esta solicitud figura en los párrafos 8 a 33 del anexo II del

informe del Secretario General (A/67/265), que señala cuatro opciones para la representación de los funcionarios ante los tribunales, a saber, a) representación a cargo de la Oficina de Asistencia Letrada; b) representación a cargo de letrados externos, ya sea pagados o *pro bono*; c) representación a cargo de exfuncionarios o funcionarios; y d) representación en causa propia. Por otro lado, el anexo contiene un análisis de cada una de las tres opciones para un mecanismo obligatorio de financiación de la Oficina a cargo del personal, a saber, a) un modelo obligatorio universal; b) un modelo de pago obligatorio para los usuarios, y c) un modelo de pago obligatorio con cargo a las cuotas cobradas por los sindicatos y las asociaciones del personal (*ibid.*, párrs. 34 a 58).

40. La Comisión Consultiva señala que las diferentes opciones se distribuyeron a los representantes de los fondos y programas y a los representantes del personal con fines de consulta en la reunión del Comité del Personal y la Administración celebrada en junio de 2012. No obstante, la Comisión también indica que no fue posible celebrar consultas con el Consejo de Justicia Interna dado que, en el momento en que se estaba finalizando el informe del Secretario General, no se habían nombrado sus nuevos miembros (*ibid.*, párr. 3). Por otra parte, la Comisión señala que si bien el Secretario General ofrece su opinión sobre las ventajas y desventajas de cada opción, no recomienda ninguna en particular en su informe. En lugar de ello, el Secretario General recomienda que la Asamblea General tome nota de las distintas opciones y examine la cuestión de si un mecanismo obligatorio de financiación de la Oficina a cargo del personal se adecua a la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, al párrafo 2 de su Artículo 17 (*ibid.*, párrs. 59 y 60).

41. La Comisión Consultiva recuerda la preocupación que ya había expresado con anterioridad relativa a la posición presentada por el Secretario General respecto a las dudas jurídicas sobre las opciones obligatorias de un mecanismo financiado por el personal para prestar apoyo a la Oficina de Asistencia Letrada al Personal (véase A/66/7/Add.6, párr. 70). Asimismo, la Comisión señala que, en su sexagésimo sexto período de sesiones, la Asamblea General decidió que la función de la Oficina siguiera siendo la prestación de asistencia a los funcionarios en la tramitación de las reclamaciones en el sistema formal de administración de justicia, incluida la representación, a la espera de un examen más detenido de la cuestión en su sexagésimo séptimo período de sesiones (véase la resolución 66/237, párr. 27). El Secretario General sigue manteniendo que habida cuenta de que el mandato de la Oficina dimana de la Asamblea General, su costo debe ser financiado por la Organización (véase A/67/265, anexo II, párr. 14).

42. En respuesta a sus preguntas, se presentó información adicional a la Comisión Consultiva sobre la disposición pertinente de la Carta. La Administración informó a la Comisión de que corresponde en última instancia a la Asamblea General decidir si los gastos ejecutados con arreglo a este mandato específico constituyen “gastos de la Organización” en el sentido del párrafo 2 del Artículo 17. Por otra parte, se informó a la Comisión de que en todas las opciones de un modelo obligatorio de financiación a cargo del personal, el supuesto de partida del Secretario General es que la Organización seguiría financiando la Oficina de Asistencia Letrada al Personal en la misma medida que en la actualidad. **Al tiempo que señala esta premisa y recuerda sus reservas anteriores respecto del mandato de la Oficina (véase A/66/7/Add.6, párr. 38), la Comisión Consultiva considera que corresponde en última instancia a la Asamblea decidir si los gastos de la Oficina constituyen gastos de la Organización. La Comisión hace notar la intención de la Asamblea de volver**

a examinar la cuestión del mandato, el alcance y el funcionamiento de la Oficina en el presente período de sesiones (véase la resolución 66/237, párr. 28).

43. En lo que respecta a las diferentes opciones indicadas por el Secretario General de un mecanismo financiado por el personal, la Comisión Consultiva observa que, en la reunión del Comité del Personal y la Administración celebrada en junio de 2012, en principio, los representantes del personal se opusieron terminantemente a toda opción o propuesta obligatoria (véase A/67/265, anexo II, párr. 36). Representantes del Secretario General también informaron a la Comisión de que el Sindicato del Personal de las Naciones Unidas estaba estudiando la posibilidad de trabajar con una aseguradora para ofrecer cobertura a sus afiliados en las causas en que la Oficina de Asistencia Letrada al Personal declinara representarlos. Asimismo, se informó a la Comisión, en respuesta a sus preguntas, de que si el personal tuviese la obligación de financiar la función de representación de la Oficina, sería necesario aplicar una deducción de aproximadamente 0,0413% al sueldo básico neto del funcionario (estimación basada en la consignación realizada en el período 2012-2013 para la Oficina).

44. **Habida cuenta de la importancia que tienen la idoneidad y la profesionalidad de la representación letrada en las causas presentadas por el personal contra la Administración y de las consecuencias financieras mínimas que un mecanismo obligatorio de financiación entrañaría para los funcionarios, la Comisión Consultiva recomienda que el Secretario General inste al personal a volver a examinar las diferentes opciones para establecer este mecanismo. Asimismo, se debería considerar la viabilidad de la opción de recurrir a aseguradoras externas. Por otra parte, la Comisión también recuerda su postura anterior de que este tipo de contribución del personal a la prestación de asistencia letrada y apoyo al personal es un elemento integral del sistema de administración de justicia (véase A/66/7/Add.6, párr. 37). Además, a la Comisión le preocupa que el Secretario General no haya expresado una opinión clara sobre cuál es la opción más viable para un mecanismo de esta índole. Por lo tanto, la Comisión recomienda que el Secretario General se decante por una sola propuesta, teniendo en cuenta las consultas que mantenga con el Consejo de Justicia Interna y otros órganos pertinentes en su sexagésimo octavo período de sesiones. La Comisión reitera su recomendación de no crear nuevos puestos para la Oficina hasta que no se adopte una decisión sobre un mecanismo financiado por el personal y sobre el mandato y alcance de la Oficina de Asistencia Letrada al Personal.**

5. Práctica de tribunales de otras organizaciones y de los Estados Miembros con respecto a la imposición del pago de daños y perjuicios ejemplares o punitivos

45. En el párrafo 34 de su resolución 66/237, la Asamblea General solicitó al Secretario General que le presentara un informe sobre la práctica de tribunales de otras organizaciones internacionales y de los Estados Miembros comparables al Tribunal Contencioso-Administrativo y al Tribunal de Apelaciones con respecto a la imposición del pago de daños y perjuicios ejemplares o punitivos, incluida su práctica en relación con el pago de indemnizaciones por daño moral, trastornos emocionales, irregularidades procesales y violación de las garantías procesales.

46. En cumplimiento de esa solicitud, la Secretaría pidió a todos los Estados Miembros y a las secretarías de tribunales administrativos internacionales comparables que enviaran información sobre sus prácticas. En el momento en que se estaba elaborando el presente informe, el Secretario General solo había recibido respuestas de siete Estados Miembros y de siete tribunales administrativos internacionales, que figuran en el anexo III del informe (A/67/265). Habida cuenta de los datos relativamente escasos recibidos hasta la fecha, el Secretario General considera que sería útil esperar a disponer de más información al respecto de los Estados Miembros. **La Comisión Consultiva hace notar el reducido número de respuestas contenidas en el informe del Secretario General y coincide con la recomendación de este de que la Asamblea General solicite que se presente más información sobre el tema para examinarla en su sexagésimo octavo período de sesiones.**

6. Procedimientos de arbitraje acelerado para los consultores y contratistas particulares

47. En el párrafo 38 de su resolución 66/237, la Asamblea General solicitó al Secretario General que le presentara un informe en que figurasen: a) una propuesta para poner en práctica el mecanismo propuesto para procedimientos de arbitraje acelerado para los consultores y contratistas particulares contemplado en el anexo II de su informe sobre la administración de justicia, incluidas las consecuencias financieras de los diferentes aspectos de la propuesta; y b) un análisis de las consecuencias normativas y financieras en caso de que los consultores y contratistas particulares previstos en la propuesta de procedimiento de arbitraje acelerado pudieran acceder a la mediación bajo el sistema informal. La propuesta sobre un mecanismo de arbitraje acelerado para los consultores y contratistas particulares figura en el anexo IV del informe del Secretario General (A/67/265), mientras que las consecuencias normativas y financieras en caso de que estos pudieran acceder a la mediación bajo el sistema informal figuran en el anexo V.

48. En su examen preliminar en 2011, la Comisión Consultiva no planteó ninguna objeción a la propuesta de procedimientos de arbitraje acelerado para los consultores y contratistas particulares, habida cuenta de que no entrañaría una ampliación del sistema formal de administración de justicia (véase A/66/7/Add.6, párr. 76). No obstante, tras examinar los anexos pertinentes del informe del Secretario General, la Comisión observa que varios de los fondos y programas se han reservado el derecho a quedarse al margen de los procedimientos de arbitraje simplificado propuestos, aduciendo posibles reservas respecto del fondo de la propuesta y/o de las repercusiones operacionales. Por otra parte, la Comisión señala que los costos estimados de los procedimientos de arbitraje acelerado son considerables. La contratación de la entidad neutral y de los árbitros previstos en la propuesta de reglamento de arbitraje acelerado supondría unos costos que oscilarían entre 1.431.150 y 1.626.150 dólares, sobre la base de un volumen estimado de unas 300 causas al año (el 0,5% del número total aproximado de consultores y contratistas particulares que trabajan para las Naciones Unidas y sus fondos y programas) (véase A/67/265, anexo IV, párr. 44). En respuesta a sus preguntas, se informó a la Comisión de que la Oficina de Asistencia Letrada al Personal necesitaría otros 27 puestos de Oficial Jurídico de categoría P-4, partiendo de la premisa de que cada oficial dedicaría una media aproximada de 24 días laborables a cada causa, con lo que se ocuparía así de tramitar alrededor de 11 arbitrajes al año.

Por otro lado, los costos previstos derivados de permitir a los contratistas particulares y consultores acceder a la mediación bajo el sistema informal ascienden a 742.900 dólares para el bienio 2012-2013 y ascenderían a 2.105.800 dólares en el período 2014-2015 (*ibid.*, anexo V, párr. 10 d) y e)). La traducción de documentos supondría costos adicionales. **A la luz de los posibles costos y repercusiones operacionales, la Comisión Consultiva recomienda que se realice un análisis más exhaustivo de la relación costo-beneficio para determinar la viabilidad de los procedimientos de arbitraje acelerado propuestos para los consultores y contratistas particulares, así como de la posibilidad de permitirles acceder a la mediación bajo el sistema informal.**

7. Acceso al sistema de administración de justicia de las diferentes categorías del personal que no es de plantilla

49. En respuesta a la solicitud formulada por la Asamblea General en el párrafo 39 de su resolución 66/237 de que presentara propuestas de mecanismos de recurso para otras categorías del personal que no es de plantilla (aparte de los consultores y contratistas particulares), el Secretario General describe las medidas de que pueden valerse para la resolución de controversias en el anexo VI del informe (A/67/265). Dentro de las categorías de personal que no es de plantilla se incluyen los Voluntarios de las Naciones Unidas, los expertos en misión, los jornaleros y los pasantes. La Comisión Consultiva observa que existen múltiples prácticas y mecanismos de recurso, que varían dependiendo de la categoría. Por ejemplo, los aproximadamente 7.500 Voluntarios de las Naciones Unidas en servicio pueden apelar las decisiones administrativas a la Coordinadora Ejecutiva de los Voluntarios de las Naciones Unidas y, posteriormente, a la Administradora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (*ibid.*, anexo VI, párr. 5). Asimismo, pueden llevar su controversia a arbitraje con arreglo al Reglamento de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Por su parte, los expertos en misión que no prestan servicios con arreglo a un contrato de consultor o contratista particular, cuyo número asciende, según se estima, a unos 17.000 (*ibid.*, párr. 14), no tienen acceso al sistema formal o informal de justicia de la Organización. Según la Administración, estas personas pueden resolver las controversias que se presenten mediante negociaciones directas con la Organización. Por el contrario, los pasantes que trabajen para la Organización pueden solicitar la evaluación interna de las decisiones administrativas impugnadas; sin embargo, no tienen acceso al Tribunal Contencioso-Administrativo ni al Tribunal de Apelaciones (*ibid.*, párr. 19).

50. En reiteradas ocasiones, la Comisión Consultiva ha expresado preocupación ante una posible ampliación del ámbito del sistema de justicia interna, no solo por las consecuencias que esa ampliación entrañaría en términos de recursos, sino también por la mayor complejidad que representaría para los jueces y el personal jurídico la adición de causas que requerirían la aplicación de disposiciones jurídicas diferentes (véase A/66/7/Add.6, párr. 76). La Comisión continúa manteniendo esa opinión.

8. Estado de los acuerdos de participación en la financiación de los gastos

51. En el párrafo 43 de su resolución 66/237, la Asamblea General solicitó al Secretario General que hiciera todo lo posible por acelerar la conclusión de un acuerdo sobre el arreglo de participación en la financiación de los gastos para el

sistema de justicia interna en su conjunto, incluso acerca del reembolso previsto de aproximadamente 6,8 millones de dólares por parte de las entidades participantes de las Naciones Unidas. El Secretario General señala que las partes han logrado progresos importantes en la concertación de un acuerdo. El memorando de entendimiento conexo se concluirá tan pronto como se promulgue el mandato de la Oficina del Ombudsman y de Servicios de Mediación de las Naciones Unidas (véase A/67/265, párr. 188). Las Naciones Unidas ya han recibido reembolsos por un total de 2.358.348 dólares de varias entidades por los gastos ejecutados en el bienio 2010-2011 (*ibid.*, párr. 189). **La Comisión Consultiva acoge con agrado los progresos logrados en la conclusión de los arreglos de participación en la financiación de los gastos entre las Naciones Unidas y las entidades participantes. Por consiguiente, la Comisión solicita al Secretario General que acelere la conclusión del memorando de entendimiento conexo tan pronto como se promulgue el mandato de la Oficina del Ombudsman y que cobre las sumas pendientes sin más demora.**

9. Propuestas de un mecanismo que permita adoptar medidas respecto de las posibles faltas de conducta de los magistrados

52. La Asamblea General, en el párrafo 44 de su resolución 66/237, solicitó al Secretario General que presentara un informe en el que figuraran propuestas y un análisis de un mecanismo que permitiera adoptar medidas respecto de las faltas de conducta de los magistrados. El Secretario General expone sus propuestas y análisis en el anexo VII de su informe (A/67/265). La Comisión Consultiva observa que la Asamblea, el Secretario General y el Consejo de Justicia Interna han presentado por separado propuestas para adoptar medidas respecto de las denuncias de falta de conducta de los magistrados. La Comisión observa que las propuestas del Secretario General y del Consejo de Justicia Interna parecen ser más eficaces en función del costo. Todas las propuestas aseguran que el magistrado contra quien se hace la denuncia goce de todas las garantías procesales necesarias y que toda decisión de destituir al magistrado quede a cargo de la Asamblea General. **La Comisión no tiene nada que objetar a las propuestas formuladas por el Secretario General o por el Consejo de Justicia Interna.**

10. Propuestas relativas a un código de conducta para la representación jurídica

53. En el párrafo 46 de su resolución 66/237, la Asamblea General solicitó al Secretario General que presentara un informe en el que formulara recomendaciones y un análisis sobre la propuesta del Consejo de Justicia Interna relativa a un código de conducta para la representación jurídica. El análisis del Secretario General al respecto se expone en el anexo VIII de su informe (A/67/265). El Secretario General, si bien apoya la idea de que se necesita un código de conducta para las personas ajenas a la Organización que actúan como representantes jurídicos en el sistema de administración de justicia, señala que ya existe un régimen jurídico para los representantes jurídicos que son funcionarios, que se rigen por las disposiciones de la Carta, el Estatuto y el Reglamento del Personal y las publicaciones administrativas. Entre otras inquietudes, el Secretario General observa que la propuesta del Consejo de Justicia Interna podría plantear problemas para los representantes jurídicos que son funcionarios de las Naciones Unidas, ya que el nuevo código establecería otra serie de obligaciones paralelas a las establecidas en el Estatuto y el Reglamento del Personal. Asimismo, considera que sería inadecuado

que los funcionarios estuvieran sujetos a dos regímenes paralelos que podrían incluso ser contradictorios (*ibid.*, anexo VIII, párr. 9). En la propuesta del Secretario General se tratan otros asuntos jurídicos que requieren, a juicio de la Comisión, un examen más a fondo por parte de expertos. **La Comisión está de acuerdo con la idea general de que se requiere un código de conducta para las personas ajenas a la Organización que actúan como representantes en el sistema de administración de justicia.**

III. Actividades de la Oficina del Ombudsman y de Servicios de Mediación de las Naciones Unidas

54. El informe del Secretario General sobre la Oficina del Ombudsman y de Servicios de Mediación de las Naciones Unidas (A/67/172) abarca las actividades de esa Oficina en 2011. La Oficina presta servicios de solución de conflictos al personal de la Secretaría, el PNUD, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Durante el período a que se refiere el informe, la Oficina se centró en tres esferas principales al ejecutar su mandato, a saber: a) la solución de los problemas laborales planteados por los funcionarios a título individual o colectivo; b) el análisis de las causas fundamentales de los conflictos a fin de acotar cuestiones sistémicas para lograr cambios positivos en la Organización; y c) la sensibilización sobre los beneficios de la colaboración en el lugar de trabajo y el desarrollo de la capacidad del personal para gestionar y prevenir eficazmente los conflictos en el lugar de trabajo (*ibid.*, párr. 14). La Oficina consta de 28 puestos y tiene un presupuesto bienal combinado de unos 10 millones de dólares (véase el cuadro 2 del presente informe).

55. Durante el período a que se refiere el informe, la Oficina integrada recibió 2.267 causas, de las que 1.588 provenían del personal de la Secretaría de las Naciones Unidas. La Comisión Consultiva observa la tendencia en cuanto al volumen de causas mostrada en el gráfico 1 del informe del Secretario General (A/67/172), que indica un aumento del 76% entre 2009 y 2011. La tasa de utilización por el personal de la Secretaría de las Naciones Unidas se sitúa alrededor del 3,2%, lo que concuerda en general con lo observado en oficinas comparables de otras organizaciones (*ibid.*, párr. 56). Se informó a la Comisión Consultiva, en respuesta a sus preguntas, de que se solía encontrar una solución mutuamente satisfactoria en un promedio del 70% al 80% de las causas que recibía la Oficina, incluidas las causas resueltas a través de un proceso de mediación remitidas al Servicio de Mediación en una etapa temprana. **La Comisión mantiene la opinión de que el proceso informal desempeña un papel importante en la resolución de controversias y, por extensión, evita litigios innecesarios. La Comisión acoge con agrado la información facilitada acerca del volumen de causas tramitadas por la Oficina del Ombudsman y de Servicios de Mediación de las Naciones Unidas que posteriormente no fueron objeto de litigio. La Comisión considera que es un indicador importante de la eficacia de la Oficina y reitera su solicitud de que esta información se incluya en los informes futuros sobre las actividades de la Oficina.**

Incentivos para la resolución informal de controversias

56. En el párrafo 16 de su resolución 66/237, la Asamblea General reafirmó que la resolución informal de conflictos era un elemento decisivo del sistema de administración de justicia y puso de relieve que debía hacerse todo el uso posible del sistema informal a fin de evitar litigios innecesarios. A ese respecto, los párrafos 75 a 84 del informe del Secretario General (A/67/172) proporcionan información actualizada y detallada sobre los incentivos establecidos para que se utilice el sistema de resolución informal de controversias. Entre otros, se cuenta una directriz del Secretario General Adjunto de Gestión a todos los jefes de departamento, en la que hizo hincapié en la necesidad de que los administradores cooperaran y respondieran a las solicitudes de la Oficina del Ombudsman y de Servicios de Mediación de las Naciones Unidas, la participación del Ombudsman en las reuniones del personal directivo superior de la Junta sobre el Desempeño de las Funciones Directivas, la promoción de talleres para desarrollar la capacidad para resolver conflictos y la colaboración con la Dependencia de Evaluación Interna a fin de prestar asistencia en la resolución oportuna de los problemas. **La Comisión Consultiva acoge con agrado las medidas adoptadas hasta la fecha para alentar la solución informal de las controversias y anima a que se sigan adoptando medidas en ese sentido.**

57. La Comisión Consultiva señala la intención de la Oficina de centrar sus actividades de divulgación en el fomento de aptitudes sustantivas en el ámbito de la prevención y resolución de controversias (*ibid.*, párr. 158), lo que prepararía a los administradores para afrontar de manera más eficaz los conflictos en el lugar de trabajo. Se informó a la Comisión de que esto se enmarcaba en las iniciativas de la Oficina para pasar de simplemente intercambiar de información básica a ayudar a la administración y al personal a impulsar cambios de comportamiento. **La Comisión acoge con agrado la intención de la Oficina a este respecto y espera con interés recibir en su próximo informe anual información actualizada sobre ese nuevo aspecto de las iniciativas de divulgación de la Oficina.**

Mandato de la Oficina del Ombudsman y de Servicios de Mediación de las Naciones Unidas

58. En el párrafo 19 de su resolución 66/237, la Asamblea General solicitó al Secretario General que trabajara con los fondos y programas de las Naciones Unidas a fin de ultimar lo antes posible el mandato revisado de la Oficina del Ombudsman y de Servicios de Mediación de las Naciones Unidas de modo que reflejara la responsabilidad de las Naciones Unidas de supervisar toda la Oficina y mejorar la coordinación entre sus distintos pilares. La Comisión Consultiva observa que, según el párrafo 9 del informe del Secretario General (*ibid.*), se ha estado ultimando la revisión del mandato sobre la base de consultas. La Comisión observa también que en el párrafo 165 del informe del Secretario General sobre la administración de justicia (A/67/265) se resumen los aspectos del mandato que siguen examinándose para su promulgación por el Secretario General. **Habida cuenta de que la Asamblea lleva esperando que se ultime el mandato revisado de la Oficina integrada del Ombudsman y de Servicios de Mediación de las Naciones Unidas desde su sexagésimo tercer período de sesiones, la Comisión destaca que el mandato debería ultimarse antes de que concluya la parte principal del sexagésimo séptimo período de sesiones.**

Tendencias con respecto a las causas relativas al personal con discapacidad

59. La Comisión Consultiva desea poner de relieve el párrafo 12 de la resolución 66/229 de la Asamblea General, relativa a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo facultativo, en la que se solicitó al Secretario General que adoptara nuevas medidas para promover los derechos de las personas con discapacidad en el sistema de las Naciones Unidas de conformidad con la Convención, incluida la retención y contratación de personas con discapacidad. En sus conversaciones sobre el carácter de las causas presentadas ante la Oficina del Ombudsman y de Servicios de Mediación de las Naciones Unidas, se informó a la Comisión, en respuesta a sus preguntas, de que desde el 1 de enero de 2010 la Oficina había recibido del personal de la Secretaría 11 causas relativas a cuestiones de discapacidad y accesibilidad, concretamente en relación con el acceso a ajustes razonables y tecnología de apoyo. **La Comisión pone de relieve el número de causas relativas a funcionarios con discapacidad y solicita al Secretario General que adopte todas las medidas correctivas necesarias para asegurar que se observen en el lugar de trabajo las disposiciones pertinentes de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.**

Anexo I

Descripción de las distintas entidades del sistema de administración de justicia

1. Oficina de Administración de Justicia

Según se describe en el boletín del Secretario General ST/SGB/2010/3, de 7 de abril de 2010, la Oficina de Administración de Justicia es una oficina independiente responsable de la coordinación general del sistema formal de administración de justicia. Presta apoyo al Tribunal Contencioso-Administrativo de las Naciones Unidas y al Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas por conducto de sus secretarías. Los magistrados son independientes e imparciales y reciben apoyo de las secretarías, que son imparciales.

2. Oficina de Asistencia Letrada al Personal

La Oficina de Administración de Justicia también presta asistencia a los funcionarios y a sus representantes en la presentación de reclamaciones y apelaciones por conducto de la Oficina de Asistencia Letrada al Personal, que es una oficina independiente que presta asistencia letrada a los funcionarios y los representa en el sistema de justicia interna. Actualmente, más de 75.000 funcionarios de todo el mundo tienen acceso al Tribunal Contencioso-Administrativo y al Tribunal de Apelaciones.

3. Oficina de Asuntos Jurídicos

Según se describe en el boletín del Secretario General ST/SGB/2008/13, de 1 de agosto de 2008, la Oficina de Asuntos Jurídicos es el servicio jurídico central de la Organización. Sus clientes principales son el Secretario General y los administradores de los departamentos y oficinas de la Secretaría, los fondos y programas y otros órganos de las Naciones Unidas. Sus funciones incluyen lo siguiente:

- a) Examinar y dar el visto bueno jurídico a las publicaciones administrativas, en particular las relacionadas con la política de gestión de los recursos humanos antes de su promulgación;
- b) Prestar asesoramiento, asistencia y apoyo jurídicos respecto de la interpretación de la Carta de las Naciones Unidas, las resoluciones y decisiones de la Asamblea General, el Estatuto y el Reglamento del Personal, los mandatos de los programas y actividades en los que participan los órganos de las Naciones Unidas y otras publicaciones administrativas de la Organización;
- c) Dar el visto bueno jurídico a las recomendaciones de destituir a funcionarios;
- d) Examinar y analizar todos los fallos de los Tribunales Contencioso-Administrativo y de Apelaciones;
- e) Coordinar, a efectos de coherencia, las estrategias y los argumentos jurídicos presentados por el Secretario General respecto de cuestiones de políticas y principios en todo el sistema de administración de justicia;

f) Determinar si redunda en interés de la Organización apelar un fallo del Tribunal Contencioso-Administrativo y representar al Secretario General ante el Tribunal de Apelaciones.

4. Sección de Derecho Administrativo

La Sección de Derecho Administrativo representa al Secretario General en la mayoría de las causas de que conoce el Tribunal Contencioso-Administrativo. Esas causas se refieren a solicitudes presentadas por personal de toda la Secretaría. Desde el punto de vista de su organización, la Sección está integrada en el Servicio de Políticas de Recursos Humanos de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos. Tiene oficiales Jurídicos en Nueva York y Nairobi. La Sección trabaja en estrecha colaboración con otras oficinas en la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, dado que las demandas que se presentan ante el Tribunal Contencioso-Administrativo se centran en la interpretación y la aplicación del Reglamento del Personal.

La Sección de Derecho Administrativo a menudo asesora a los administradores de la Secretaría en lo relativo al sistema de justicia interna. También formula recomendaciones al Secretario General Adjunto de Gestión sobre si se debe tratar de lograr una solución informal. La Sección obtiene las aprobaciones necesarias, presta asesoramiento en el curso de las negociaciones con el demandante o a su asesor y colabora con la Oficina del Ombudsman en ciertos casos para ultimar el acuerdo de solución y su ejecución. Por lo general, aproximadamente entre el 10% y el 15% de las causas resueltas de la Sección se resuelven informalmente mediante arreglos, con o sin la asistencia de la Oficina del Ombudsman. Cuando el Tribunal Contencioso-Administrativo dicta un fallo, la Sección actúa de enlace con la Oficina de Asuntos Jurídicos, que determina si conviene apelarlo ante el Tribunal de Apelaciones. La Sección ejecuta los fallos definitivos, para lo cual obtiene la información necesaria y transmite los fallos a los funcionarios pertinentes, incluido el Contralor, para su ejecución.

5. Dependencia de Evaluación Interna

Dependencia de Evaluación Interna examina las solicitudes de evaluación interna presentadas por funcionarios de la Secretaría, incluidas las comisiones regionales y otras entidades como el Tribunal Penal Internacional para Rwanda y el Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia. Esto incluye unos 45.000 funcionarios.

La Dependencia de Evaluación Interna ejerce sus funciones con absoluta neutralidad e imparcialidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el proceso de evaluación interna es la última oportunidad que tiene la Administración para reconsiderar sus decisiones y que la Dependencia de Evaluación Interna forma parte del Departamento de Gestión. La Dependencia, además de recomendaciones sobre la reconsideración de decisiones, formula recomendaciones sobre la rendición de cuentas de los directivos en las causas en que se han tomado decisiones inadecuadas.

6. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

Los clientes del Servicio de Asuntos Jurídicos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) dependen de la

etapa en que se halle el proceso de recurso en el sistema de administración de justicia. En el contexto de la mediación, a veces la Oficina del Ombudsman o la División de Gestión de Recursos Humanos del ACNUR piden al Servicio de Asuntos Jurídicos que les proporcione asesoramiento sobre cuestiones jurídicas pertinentes para la causa de que se trate. En el contexto del proceso de evaluación interna, el Servicio proporciona asesoramiento jurídico al Alto Comisionado Adjunto, quien tiene autoridad para llevar a cabo evaluaciones internas en el ACNUR. En los procedimientos del Tribunal Contencioso-Administrativo, el Servicio representa al asesor jurídico del demandado. En los recursos de apelación, el Servicio presta asistencia a la Oficina de Asuntos Jurídicos en la preparación de los escritos que se han de presentar al Tribunal de Apelaciones. Por consiguiente, en función de la etapa del proceso de recurso, los clientes del Servicio pueden ser la División de Gestión de Recursos Humanos, la Oficina del Ombudsman, el Alto Comisionado Adjunto (en su calidad de “evaluador interno”) y el asesor jurídico del demandado en las causas ante los Tribunales Contencioso-Administrativo y de Apelaciones.

7. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (fondos y programas)

La Oficina de Apoyo Jurídico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es una oficina jurídica integrada para el PNUD y sus organismos afiliados, que presta asesoramiento jurídico a los administradores en las dependencias de la Sede, los centros regionales y las oficinas en los países sobre todos los aspectos de los asuntos jurídicos de índole administrativa, empresarial e institucional.

Respecto del sistema de administración de justicia, la Oficina de Apoyo Jurídico desempeña las siguientes funciones: a) representa al PNUD y otros organismos afiliados en el sistema de administración de justicia tramitando causas en la etapa de evaluación interna y ante el Tribunal Contencioso-Administrativo; b) apoya a la Oficina de Asuntos Jurídicos en su representación del Secretario General en causas relativas al PNUD ante el Tribunal de Apelaciones; c) participa en la resolución informal de reclamaciones, según se requiera, incluso en los procedimientos de mediación; d) tramita las causas administrativas y disciplinarias y formula recomendaciones a la administración, cuando proceda; e) asesora sobre todos los aspectos jurídicos de la gestión de los recursos humanos en relación con el personal, incluidos, entre otros, el desempeño, los derechos y obligaciones, y los problemas de conducta; f) proporciona asesoramiento jurídico sobre la labor normativa respecto del sistema de administración de justicia; g) imparte capacitación jurídica a los funcionarios sobre cuestiones relacionadas con el sistema de administración de justicia.

8. Oficina del Ombudsman y de Servicios de Mediación de las Naciones Unidas

La Asamblea General estableció la Oficina del Ombudsman y de Servicios de Mediación de las Naciones Unidas como un tercero neutral con el mandato de prestar servicios de resolución informal de conflictos al personal de la Secretaría de las Naciones Unidas (sin contar el personal que no es de plantilla). En su calidad de partes neutrales e independientes, los ombudsman y los mediadores de las Naciones Unidas prestan asistencia a los funcionarios de la Organización para que resuelvan sus problemas laborales y ayudan a resolver los conflictos por medios informales.

Anexo II

Funcionarios que trabajan en la administración de justicia en 2012-2013

<i>Entidad/oficina</i>	<i>Presupuesto ordinario, 2012-2013</i>	<i>Cuenta de apoyo para las operaciones de mantenimiento de la paz, 2012/13</i>	<i>Otros^a</i>	<i>Plantilla total</i>
Oficina de Administración de Justicia	26	—	—	26
Oficina del Ombudsman y de Servicios de Mediación de las Naciones Unidas	21	9	—	30
Oficina de Asistencia Letrada al Personal	10	1	1	12
Dependencia de Evaluación Interna	6	—	—	6
Oficina de Gestión de Recursos Humanos	9	10	—	19
Oficina de Asuntos Jurídicos	6	3	1	10
Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico	—	—	—	—
Comisión Económica y Social para Asia Occidental	1	—	—	1
Comisión Económica para África	—	—	—	—
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra	2	—	—	2
Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi	2	—	—	2
Total	83	23	2	108

^a Fondos y programas y Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

Anexo III

Organigrama del sistema de administración de justicia de las Naciones Unidas

Oficina de Administración de Justicia	Ombudsman y Servicios de Mediación	Oficina de Asistencia Letrada al Personal	Dependencia de Evaluación Interna	Sección de Derecho Administrativo de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos	Oficina de Asuntos Jurídicos	Otros ^b
PO: 1 D-2 1 D-1 4 P-5 6 P-4 1 P-3 5 SG (OC) 2 CL PTG: 3 P-3 3 SG (OC)	PO: CA: 1 ASG 3 P-5 2 D-1 2 P-3 7 P-5 2 LL 2 P-4 1 P-3 5 SG (OC) 3 CL PTG: 1 P-4 1 SG (OC)	PO: CA: 1 P-5 1 P-3 5 P-3 1 P-2 3 SG (OC) ACNUR: 1 P-3	PO: 1 P-5 2 P-4 3 SG (OC)	PO: CA: 2 P-5 3 P-4 1 P-4 3 P-3 2 P-3 1 P-2 3 SG (OC) 1 SG (OC)) PTG: PTG: 1 P-3 1 P-3 1 P-2	PO: CA: 1 P-5 1 P-4 2 P-4 2 P-3 1 SG (OC) F y P ^a PTG 1 P-4 1 P-4 1 P-3	CEPA Sin recursos CESPAP Sin recursos CESPAP 1 P-4 ONUN 1 P-4 1 CL ONUG 1 P-4 1 SG (OC)

Abreviaturas: ACNUR, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados; CA, cuenta de apoyo; CEPA, Comisión Económica para África; CESPAP, Comisión Económica y Social para Asia Occidental; CESPAP, Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico; CL, contratación local; ONUG, Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra; ONUN, Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi; PO, presupuesto ordinario; PTG, personal temporario general, F y P, fondos y programas; SG (OC), Cuadro de Servicios Generales (otras categorías); SsG, Subsecretario General.

^a Puesto sufragado en virtud de arreglos de participación en la financiación de los gastos concertados con los fondos y programas.

^b Todos los funcionarios trabajan como personal temporario general y sus gastos se sufragan con cargo al presupuesto ordinario. En los lugares donde no se asignan recursos propios a los asuntos de administración de justicia (la Comisión Económica para África y la Comisión Económica y Social para Asia Occidental), cuando ha sido posible, se han tramitado las causas utilizando recursos reasignados de otros ámbitos.

Anexo IV

Desglose del volumen de causas de la Oficina de Asistencia Letrada al Personal en 2012, al 30 de septiembre de 2012

<i>Número de oficiales</i>	<i>Causas</i>						<i>Total</i>	<i>Promedio por oficial en el período de nueve meses</i>
	<i>Asuntos disciplinarios</i>	<i>Evaluación interna</i>	<i>Ante el Tribunal Contencioso-Administrativo</i>	<i>Ante el Tribunal de Apelaciones</i>	<i>Otros</i>	<i>Asesoramiento sumario</i>		
Nueva York (3 oficiales)	38	9	29	6	5	58	145	48,3
Addis Abeba (1 oficial)	16	13	19	9	8	19	84	84
Nairobi (2 oficiales)	46	78	63	14	19	41	261	130,5
Ginebra (2 oficiales)	11	7	12	0	11	33	74	37
Beirut (1 oficial)	15	14	24	10	7	22	92	92
Total (9 oficiales)	126	121	147	39	50	173	656	72,9